

PACTO DEL AGUA LA REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

Todos los partidos salvo el PP critican la «inconcreción» de Tejerina

● Los populares defienden que el trasvase «es cosa del pasado» y el resto ve con recelo las palabras de la ministra

ZARAGOZA. El «no al trasvase si no hay acuerdos» de la ministra Tejerina fue muy criticado por los partidos de la oposición. Todos salvo el PP cargaron contra la «inconcreción» de la ministra de Agricultura al término de la comisión del pacto del agua.

La portavoz popular, Mar Vaquero, recalcó que la amenaza de trasvase «es algo del pasado». En su opinión, Tejerina no pudo ser

más categórica. «En Aragón no hay acuerdo para hacer un trasvase. Aquellos grupos que quieren rescatar el tema lo hacen para generar ruido», manifestó.

Javier Sada (PSOE), en cambio, sí vio en las palabras de la ministra una cierta «inconcreción». «Esperamos que el 'no' sea cierto», apuntó. El portavoz socialista recalcó que el PSOE de Aragón «no va a acordar ningún trasvase

del Ebro». También se refirió a la reserva hídrica. «Hemos pedido que se concrete», expuso.

Podemos reconoció no fiarse «del Ministerio ni de la ministra» en lo que respecta a posibles trasvases. La diputada Marta de Santos calificó de «decepcionante» el encuentro, ya que la formación morada «esperaba compromisos y soluciones». «Sigue redundando en el conflicto, en promesas que sabe que no va a poder cumplir», añadió. A Arturo Aliaga (PAR), le habría gustado que hubiese dicho que mientras ella fuese ministra no habrá trasvase. C's, por su parte, opinó que lo dicho por Tejerina es «una evidencia». «Una infraestructura con enormes implicaciones socioeconómicas, financieras y ambientales requiere inevitablemente de consensos», explicó Jesús Sansó.

Para Gregorio Briz (CHA), la ministra perdió una oportunidad de oro para dar «un 'no' categórico al trasvase». «Dice que dependerá de si hay acuerdo, ¿pero dónde? ¿En las Cortes? ¿En Aragón?», se preguntó. A su enten-

der, la ministra acudió únicamente «para cubrir el expediente». Su postura coincide con la de IU. «Hubiera sido fácil decir 'no' al trasvase, pero no lo ha hecho», afirmó Patricia Luquin.

El propio pacto del agua también dividió a derecha e izquierda. CHA e IU creen que «ha llovido mucho» desde 1992, año en que se aprobó, motivo por el que instan a actualizarlo. «No pueden ser las tablas de Moisés», comentó Luquin. «Han cambiado muchas cosas. Está el cambio climático, la composición de los parlamentos... Habría que revisarlo e insertarlo en un gran pacto nacional del agua», agregó Briz.

Ciudadanos también aludió a la necesidad de «actualizar el mensaje» y el PAR recordó que estuvo en los inicios del pacto del agua y cuando se revisó. «Y estaremos donde haya que estar cuando haya que pensar en el siguiente», recaló Aliaga. Para el PP, en cambio, quedó claro que la mayor parte del arco parlamentario sigue apoyando las obras del actual pacto del agua, que surgió «gracias a la unanimidad», de ahí que su portavoz, Mar Vaquero, no vea motivos para cambiarlo.

Pese a que partidos como el PP o el PAR se centraron en reivindicar las obras ejecutadas o en fase de ejecución, otros como el PSOE insistieron en potenciar obras prioritarias como la de Almodévar. «Debe estar en marcha cuanto antes», afirmó Sada.

Las palabras de Tejerina no solo hicieron reaccionar a los grupos de las Cortes. La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases se concentró frente a la Aljafería para solicitar el «carpetazo definitivo» al pacto del agua, reivindicación, que, según lo dicho por Tejerina, está lejos de ser una realidad. UAGA, por contra, subrayó la importancia del regadío en Aragón. «La margen derecha no puede esperar más al gran poder transformador del agua», dijo su secretario general, José Manuel Penella.

JORGE LISBONA

El Consejo de la Cartv propone a Barraguer como director general

ZARAGOZA. El Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) acordó ayer por mayoría absoluta proponer a las Cortes de Aragón que el periodista y actual jefe de los informativos de Aragón TV, Samuel Barraguer, sea el nuevo director general, quien tomaría el relevo de Jesús López Cabeza.

La propuesta contó con diez votos a favor (PSOE y Podemos, Ciudadanos y el representante del Consejo Asesor de la Cartv), cinco en contra (PP) y una abstención (PAR). La decisión fue el único punto del orden del día de la reunión del Consejo de Administración que preside el exconsejero y exdiputado socialista Alfredo Arola.

Con este resultado, obtenida la mayoría absoluta que contempla la Ley de Creación, Organización y Control Parlamentario de la Cartv, la propuesta deberá ser remitida a la comisión institucional de las Cortes y posteriormente tendrá que ser votada en el pleno de la Cámara para que el nombramiento sea efectivo.

HERALDO

POLÍTICA

El PAR pide ayudas para el comercio de proximidad

El PAR ha presentado en las Cortes una proposición no de ley en la que pide al Gobierno de Aragón que elabore un programa de digitalización y modernización que involucre a las asociaciones de empresarios y a todos los agentes públicos y privados que puedan fomentar la economía digital en el comercio de proximidad. Quiere, asimismo, que se desarrolle un paquete de ayudas que hagan más competitivo al pequeño comercio de la Comunidad.

FINANCIACIÓN

Alain Cuenca insta a llevar el cupo vasco al Constitucional

El experto en financiación Alain Cuenca, que participó por Aragón en la comisión encargada del informe base para la reforma del cupo vasco, ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra la ley ante el Tribunal Constitucional por entender que es errónea y da lugar a desigualdades. A su entender, «genera diferencias entre el País Vasco y las regiones de régimen común» y vulnera el artículo 138.2 de la Constitución.



Los representantes de los partidos políticos de Aragón, ayer durante la comisión. GUILLERMO MESTRE

La Cámara de Cuentas asegura que no se desviaron fondos del plan de depuración

ZARAGOZA. El recientemente elegido presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, defendió ayer en las Cortes que «no ha existido desviación» de los fondos estatales del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), ya que el convenio suscrito en 2008 entre el Gobierno de España y el de Aragón –firmado para levantar las plantas pendientes del Pirineo– contemplaba la posibilidad de destinar parte de los en torno a 142 millones de euros «a actuaciones en materia de abastecimiento y obras del ciclo del agua». «Que estaban inicialmente previstas es indiscutible, no ha habido desviación», recaló el que fuera interventor de la DGA durante el Gobierno de Marcelino Iglesias.

El propio órgano cuestionó en el informe fiscalizador del Instituto Aragonés del Agua de 2015 la decisión de privatizar el diseño, construcción y mantenimiento de las plantas, que ha cuadruplicado los gastos. Ayer, Peña incidió en que Aragón «volverá a la casilla de salida» en caso de que la Administración exija el reintegro de los 117 millones no ejecutados. «Esto obligaría implícitamente a devolver las competencias», aseguró. Opinó que el Ejecutivo autonómico «tendría que haber priorizado las depuradoras», ya que, en caso de tener que devolver los fondos, «tendrá que seguir viviendo el bochorno de no tener acabadas las obras 20 años después de ser declaradas de interés general».

Respecto a las diferencias de costes entre las distintas infraestructuras, el presidente de la Cámara de Cuentas afirmó que será «la ingeniería del Instituto Aragonés del Agua» quien tenga que dar explicaciones, ya que el organismo estudió «los costes aparentes» y no pudo verificar si, por ejemplo, todos los contratos eran iguales. Destacó, en todo caso, que el sistema concesional escogido para la construcción de las depuradoras «no era viable» en época de crisis. «Fue determinante para su falta de ejecución», manifestó.

Peña reconoció que el PASD no ofrece una foto esperanzadora. Sobre todo teniendo en cuenta que el ICA, su principal sustento, está ahora en fase de revisión. Es-

to, según sus palabras, hace que la incertidumbre sea «más amplia».

Para el PP, lo importante es que se pongan «luz y taquígrafos» y que se aclare de dónde procedían los costes. El PSOE, en cambio, defendió que las discrepancias señaladas en materia contable «entran dentro de la normalidad». Podemos criticó que el organismo no emitiese un informe negativo tras detectar «21 incoherencias contables» y el PAR, partido del entonces consejero Alfredo Boné, subrayó que el problema está «en por qué no se han hecho las obras». Ciudadanos se centró en las «salvedades» que salpican el informe, que deberán ser analizadas con profundidad en la comisión de investigación de las Cortes, y el Grupo Mixto aludió a la incertidumbre que genera el hecho de que el Estado pueda reclamar a Aragón los 117 millones sin ejecutar.

J. L. Q.